



JUNTA GENERAL
DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

XI Legislatura

WWW.JGPA.ES



COMISIÓN DE ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA COVID 19

Intervención de Gerardo L. Argüelles, Área de Acción Sindical de CCOO de Asturias

Buenos días, Señorías

Quiero comenzar mi intervención teniendo un afectuoso recuerdo para las víctimas de esta pandemia y sus familias, y un especial reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras que han sostenido este país, durante esta situación sin precedentes y que siguen al pie del cañón dando lo mejor de sí mismos.

Igualmente quiero agradecerles, en nombre de las Comisiones Obreras de Asturias, la posibilidad de participar en esta Comisión para analizar la respuesta de la Administración asturiana ante los retos a los que nos hemos enfrentado durante esta crisis sanitaria y social provocada por la pandemia de la covid-19 y, lo que es aún más importante, cómo abordamos su salida y el futuro de una recuperación que no deje a nadie atrás en el marco del consenso y del diálogo social.

Esta pandemia ha provocado una crisis mundial sin precedentes. Las medidas de confinamiento y las limitaciones impuestas a determinadas actividades para preservar la salud de las personas han tenido, y están teniendo, un gravísimo impacto económico y social que, en el caso de Asturias han venido a sumarse a otros retos como la transición ecológica, la descarbonización de la industria, la ralentización económica, o el declive demográfico, y que suponen también un retroceso dramático en los lentos avances conseguidos para recuperarse de la crisis económica y financiera desatada en 2008.

Todos los indicadores muestran los devastadores efectos de la pandemia sobre la actividad, el empleo y las cuentas públicas. Ninguna cifra macroeconómica ha permanecido indemne. En este contexto se han puesto en marcha, a distintos niveles de gobierno, diferentes medidas destinadas a salvaguardar el empleo, inyectar liquidez a las empresas y dotar de rentas de sustitución a los afectados por la crisis, algunas de ellas consensuadas con los interlocutores sociales mediante la firma de importantes acuerdos. Son medidas que van en la línea correcta, pues sin ellas el daño en el tejido productivo y la destrucción de empleo serían muy superiores, aunque son menos ambiciosas y redistributivas de lo que la grave situación requiere. El momento exige también articular medidas de impulso de la actividad encaminadas a la reconstrucción económica y social, para tratar que la recuperación sea lo más temprana y vigorosa posible.

Ante esta necesidad, ya en abril desde CCOO pusimos sobre la mesa un Plan Asturiano para la Recuperación (PAR) con cincuenta medidas urgentes en torno a tres grandes ejes: blindar el sistema sanitario y sociosanitario; rescatar la economía real, proteger el empleo e invertir en futuro; y luchar contra la desigualdad para proteger a las familias con menos recursos y más vulnerables. Fuimos la primera organización que presentó una iniciativa de estas características, con acciones concretas para afrontar tanto la epidemia como la crisis económica. Éramos muy conscientes de la necesidad de reaccionar, de anticiparnos, de reforzar la inversión pública para proteger la salud, pero también la economía y el empleo.

El Plan que defendimos sentó las bases del acuerdo que alcanzamos el Gobierno del Principado y los agentes sociales en agosto: la Concertación para la Recuperación Económica de Asturias (CREA). Un pacto que moviliza un mínimo de 640 millones de euros para crear empleo, apoyar a las empresas, impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, apostar por el desarrollo tecnológico, la formación, el talento o garantizar los medios para impedir que trabajar pueda costarnos la vida.

Hemos sido exigentes pero responsables, porque sabíamos que era el momento de arrimar el hombro y poner sobre la mesa soluciones, propuestas serias y viables. La concertación no es un cheque en blanco al gobierno, al contrario, es un plus de responsabilidad para el Principado porque ahora no hay excusas para fracasar.

La pandemia ha provocado una caída histórica de la actividad productiva. Las medidas encaminadas a detener la propagación del virus llevaron a una restricción severa de la movilidad y de la actividad civil y económica, con un período de confinamiento sin precedentes que, entre otras muchas consecuencias, ha provocado una recesión económica profunda y sin parangón: en España el PIB cayó un 5,2% en el primer trimestre, con sólo dos semanas de confinamiento, y un 18,5% en el segundo.

La recuperación va a ser mucho más lenta que la caída, si tenemos en cuenta que en las previsiones para el 2020 el PIB caerá en España entre un 9,2% y el 13,0%. Cabe recordar que en Asturias ni siquiera habíamos logrado volver a los niveles de actividad previos a la crisis de 2008.

En cualquier caso, la evolución va a depender de los datos epidemiológicos y de la gestión sanitaria y económica de los gobiernos. Evitar el desastre económico y consolidar la recuperación pasa también por aprovechar al máximo los fondos disponibles, y que se utilicen para modernizar y dinamizar la economía, en un marco de máximo consenso político y un clima de diálogo social.

A su vez, debemos recordar la importancia de las rentas del trabajo (salarios y pensiones), para impulsar la demanda interna, reactivar el consumo y contribuir a generar actividad económica y crear empleo. La experiencia de la crisis anterior muestra que optar por lo contrario, la vía de las congelaciones salariales y los descuelgues indiscriminados de convenio, no conduciría a salir de la crisis, sino a profundizarla. Desgraciadamente, asistimos a un riesgo elevado de que se produzca una caída general de los salarios si no se modifica la reforma laboral.

La expansión del coronavirus ha impactado en Asturias sobre un mercado laboral herido, que todavía no se había recuperado de la crisis.

Entre marzo y abril se destruyeron en Asturias 14.400 empleos, la mayor parte por finalización masiva de contratos temporales. Hay que tener en cuenta que uno de cada cuatro asalariados asturianos es temporal, fiel reflejo del modelo de contratación en nuestro país, basado en la precariedad.

En sólo dos meses el mercado laboral asturiano retrocedió tres años, situándose el número de afiliados en alta a finales de abril en 349.067 personas. Esta cifra incluye a 59.221 trabajadores acogidos a un ERTE, con lo que el número de afiliados trabajando efectivamente se desplomó por debajo de los 290.000, una cifra sin precedentes en la serie histórica que abarca casi 40 años.

La progresiva relajación de la gran mayoría de las restricciones en vigor y la llegada de la temporada de verano ni siquiera han permitido recuperar ocho de cada diez empleos perdidos en marzo y abril.

El fin del verano va a suponer que a lo largo de los próximos meses vuelva a destruirse empleo y crezca con fuerza el desempleo. Por sectores de actividad, los que más lejos están de volver a las cifras de empleo de hace un año son las actividades artísticas y de ocio, la hostelería, la industria manufacturera y la construcción. Las actividades sanitarias, por el contrario, son el único sector con más empleo que hace un año (1.600 empleos más).

El teletrabajo ha sido otro importante muro de contención del desempleo. Aproximadamente un 22,4% de los ocupados asturianos podía teletrabajar, aunque sólo lo hizo un 6,6%. Existe, pues, un amplio margen de mejora en esta modalidad de empleo, que precisa de una regulación clara.

La cifra de afiliados a finales de agosto incluye a 10.866 personas en ERTE. Desde el inicio de la desescalada ocho de cada diez trabajadores y trabajadoras regulados se han reincorporado a la actividad. En particular, la autoridad laboral asturiana ha hecho un importante esfuerzo, tramitando desde el 11 de marzo 12.707 solicitudes de ERTE que involucran a 54.391 trabajadores. Por sectores, las empresas de restauración y hostelería, de comercio minorista, de fabricación de productos metálicos y de peluquería y estética, así como las de reparación y venta de vehículos son, por este orden, las que más se han visto obligadas a regular temporalmente a sus trabajadores y trabajadoras. En coherencia con esta distribución sectorial, las mujeres han sido mayoría entre los trabajadores regulados.

La regulación especial de los ERTE, que combina flexibilidad laboral con protección social, ha conseguido salvar miles de puestos de trabajo que, sin ella, se habrían traducido en despidos. Podemos decir que los ERTE han jugado un papel clave en la gestión de los efectos sociales y económicos de la pandemia evitando, por primera vez en España, que el empleo cayera más que el PIB durante la crisis. Pero cabe el riesgo de que, una vez termine la prohibición de despedir vinculada a los ERTE, se produzca un aumento de las extinciones de contratos, lo que, además del impacto sobre los trabajadores y trabajadoras, repercutiría negativamente sobre la recuperación de la demanda y la actividad económica.

En cuanto a los autónomos, la prestación extraordinaria por cese de actividad ha llegado a 34.611, prácticamente uno de cada dos trabajadores y trabajadoras por cuenta propia.

Por otra parte, las 8.000 empleadas del hogar que en Asturias cotizan al sistema especial son uno de los colectivos más precarios y más afectados por la crisis del coronavirus. Fruto de la presión sindical se aprobó a finales de marzo un subsidio extraordinario, pero lamentablemente hemos de denunciar que en el mejor de los casos se está empezando a cobrar ahora, seis meses más tarde, y sólo llegará a una minoría, quedando al margen quienes trabajaban sin contrato ni alta en la Seguridad Social, situación muy frecuente en este sector, altamente feminizado.

Esta crisis ha reducido dramáticamente las oportunidades de empleo, y prueba de ello es el desplome de las contrataciones. En circunstancias normales, entre marzo y agosto deberían haberse realizado en nuestra región cerca de 198.000 contratos, siendo los firmados poco más de la mitad.

Los datos muestran que las mujeres y los jóvenes vuelven a ser los más perjudicados. Por sectores, los que han sufrido un mayor impacto han sido los servicios, donde se han hecho la mitad de las contrataciones habituales, y la industria y la construcción, que han caído más de un 30%.

Los ERTE han impedido que el paro se desbocase. Aun así, la región alcanzó en mayo la cifra de 83.860 parados y paradas registrados, la más alta en tres años, siendo el sector industrial donde más ha crecido el paro. La finalización de la temporada de verano y los nuevos rebrotes del virus amenazan con que el paro se dispare en los próximos meses, y que se convierta en estructural. Por ello nuestra prioridad en la recuperación debe ser crear empleo de calidad y con derechos.

El SEPE recibió en Asturias 209.678 solicitudes relacionadas con prestaciones por desempleo, y tramitó 201.576 altas (iniciales+renovaciones), unos volúmenes sin precedentes que han desbordado unos servicios que cuentan con unos recursos humanos y materiales limitados, lo que explica que pese al esfuerzo de la plantilla (a la que desde CCOO queremos reconocer públicamente su trabajo), hubiera retrasos e incidencias en el cobro. Por ello exigimos que se dote de personal y recursos suficientes este servicio público.

Al menos 42.644 parados y paradas registrados en nuestra región no reciben prestaciones por desempleo, ya que éstas apenas llegan a la mitad de los parados que han cotizado previamente. Para evitar lagunas, la protección por desempleo debe ser mejorada y reforzada, en la línea propuesta por CCOO y UGT.

La aguda crisis económica provocada por las medidas de contención contra el virus está golpeando a muchos hogares, y algunos de ellos se encuentran especialmente desprotegidos. En Asturias había registradas a finales de julio 22.327 familias que perciben el Salario Social Básico, lo que se traduce en una población beneficiaria que supera las 46.900 personas. Se calcula que el Ingreso Mínimo Vital, beneficiará al 75% de los actuales perceptores del salario social.

La pandemia se ha cebado con la clase trabajadora, pero para no dejar a nadie atrás hay que seguir avanzando en la adopción de medidas de protección social dirigidas a aquellos sectores de la población aun desprotegidos, con el fin de evitar el aumento de la pobreza y la desigualdad, tarea que debe abordarse en el marco del diálogo social.

La pandemia está provocando un importante descalabro en las cuentas públicas, una fuerte caída de la recaudación tributaria y unos gastos disparados. La última cifra ofrecida por el Gobierno regional es de 300 millones de euros de desfase presupuestario. La necesidad de recursos es ahora mayor que nunca, y en nuestra comunidad autónoma esto pasa por una reforma del sistema de financiación autonómica.

Esta crisis ha puesto de manifiesto la importancia de la inversión en servicios públicos esenciales: sanidad, educación, servicios sociales... En Asturias el gasto por habitante se situaba en 2019 en 2.948,92 euros, un 18,0% más que la media nacional. En particular, en sanidad y servicios sociales somos la comunidad con el segundo gasto por habitante más elevado, un 28,4% y un 50,5% superior a la media, respectivamente.

La necesidad de disponer de mayores recursos pasa asimismo por llevar a cabo una profunda reforma tributaria que desde CCOO llevamos años demandando. Una reforma que incremente sustancialmente la recaudación con criterios de progresividad y redistributivos: lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, revisión de todas las deducciones fiscales, aumento del IRPF a las rentas más altas, tipo medio efectivo mínimo sobre los beneficios del 15% en el Impuesto de Sociedades, revisión completa del IVA para hacerlo menos regresivo, armonización de los impuestos sobre la riqueza y nuevos impuestos sobre los servicios digitales y las transacciones financieras...

Es necesario además disponer de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2021 y por supuesto, de unos Presupuestos autonómicos que impulsen la recuperación económica y atiendan las necesidades sociales. Las prioridades están señaladas en el acuerdo de Concertación para la Recuperación Económica de Asturias (CREA) suscrito por el Gobierno regional y las organizaciones sociales y económicas más representativas de la región.

Señorías, la hoja de ruta está marcada, ahora es su labor negociar, acordar y aprobar los presupuestos de la recuperación.

En cualquier caso, la respuesta a esta crisis no puede ser solo nacional. Nadie puede cuestionar que nos enfrentamos a un reto colosal, un desafío que trasciende fronteras. La Unión Europea parece que asume una apuesta ambiciosa: salir de esta crisis mediante la movilización de cientos de miles de millones de euros para financiar la recuperación económica, impulsar la transformación digital y apostar por la transición ecológica, con políticas presupuestarias expansivas en el conjunto de la UE que superen la austeridad, dando una respuesta colectiva y mancomunada a la crisis generada por la pandemia.

Se estima que podrían llegar a nuestra región 2.800 millones de euros de fondos europeos. Captar el mayor volumen posible de recursos pasa por presentar proyectos atractivos, tarea que exige aunar esfuerzos.

La terrible paradoja es que esta crisis puede ser quizás la última oportunidad para Asturias, la última oportunidad para subirnos al tren del futuro. Tenemos por delante dos opciones: continuar sin hacer los deberes o remangarnos y ponernos manos a la obra para afrontar las asignaturas pendientes, diversificar y fortalecer nuestra economía, crear empleo con derechos y garantizar la igualdad de oportunidades. CCOO lo tiene claro.

No hay excusas.

Las crisis son una prueba de fuego para los liderazgos. Ahora más que nunca necesitamos que los gobiernos sean capaces de anticiparse, demostrar diligencia y eficacia, y ser proactivos en la búsqueda de grandes acuerdos estratégicos.

No son tiempos de palabras huecas sino de hechos concretos. A ello les animamos.

Señorías: pacten, acuerden y aprueben unos presupuestos que el futuro de Asturias necesita.

Oviedo, 23 de septiembre de 2020



ACTUAR
es esencial
PASE LO QUE PASE

